

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-5603-2020  
CARATULADO : WALTEMATH/FISCO DE CHILE / CONSEJO  
DE DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veintitrés de Enero de dos mil veinticuatro

**VISTOS:**

Con fecha 24 de marzo de 2020, comparece Carlos Peña y Sebastián Lizana, abogados, en representación de Krystel Abrigo Jara, secretaria, y ésta a su vez en representación de su hija menor de edad Marthina Waltemath Abrigo, estudiante, todos domiciliados en paseo Ahumada 312, Santiago, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario en contra de Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, domiciliados en Agustinas 1687, Santiago.

Con fecha 19 de junio de 2020, la demandada contestó la demanda deducida en su contra.

Con fecha 7 de julio de 2020, la demandante evacuó la réplica.

Con fecha 21 de julio de 2020, la demandada evacuó la dúplica.

Con fecha 13 de agosto de 2020, se omitió citar a las partes a la audiencia de conciliación, atendido lo dispuesto por el artículo 748 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 4 de febrero de 2021, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 7 de febrero de 2023, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, la demandante solicita se le indemnicen los perjuicios ocasionados por la denegación de servicio, mediante actos, omisiones y decisiones de sus agentes, por miembros de Carabineros de Chile y del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte, que intervinieron directamente en el marco de la negligente investigación seguida en la causa RUC N°1400138259-5.

A modo de introducción explica que su representada fue colisionada por un bus del Transantiago el día 7 de febrero de 2014 en la comuna de Cerro Navia, producto del cual falleció su pareja y padre de su hija, Matías Waltemath Núñez, y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YQHDXLGBVMK

ella resultó con lesiones de extrema gravedad que la tuvieron por más de un mes internada, dejando una serie de secuelas físicas y psíquicas que la aquejan hasta la época. Ante la nula protección, y frente a una investigación negligente de parte del Ministerio Público y Carabineros de Chile, fue la propia víctima quien tuvo que ejercer sus derechos frente a un tribunal, atendida la negativa del Ministerio Público.

En cuanto a los hechos, señala que producto de un viraje antirreglamentario de un bus de locomoción colectiva, conducido por Carlos Becerra Figueroa, inscrito a nombre de Buses Metropolitana S.A., invadió la pista de circulación derecha en la que se desplazaba la demandante y su pareja en una motocicleta, impactándolos, producto de lo cual Matías Waltemath Núñez falleció por un traumatismo encéfalo craneano y Krystel Abrigo Jara resultó con lesiones de tal gravedad que quedó internada en la Unidad de Tratados Intensivos del Hospital San Juan de Dios. Según consta en el Parte Detenido N°713 de 7 de febrero de 2014 de la 45° Comisaría de Carabineros de Chile de Cerro Navia, por instrucción del fiscal Cristián Meneses Díaz, de la Fiscalía Local Centro Norte, se constituyó en el lugar un equipo de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito de Carabineros de Chile (SIAT), a cargo del capitán Marcelo Valenzuela Rodríguez, donde se estableció como causa basal del accidente una maniobra indebida de adelantamiento de la motocicleta en que circulaba ella y su pareja. Luego, con fecha 14 de febrero, como primera diligencia, el fiscal Alejandro Sánchez Mondaca instruyó que se remitiera el informe SIAT, el cual fue recibido el 18 de marzo de 2014.

Con estos antecedentes, de forma negligente y sin haber realizado una investigación acorde a los hechos sometidos a su conocimiento, el 13 de junio de 2014, la fiscal Patricia Varas Pacheco, sin otro antecedente que el referido, hizo uso de la facultad de no dar inicio a la investigación por no ser hechos constitutivos de delito, según lo dispuesto por el artículo 168 del Código Procesal Penal, lo que fue aprobado por resolución del 5° Juzgado de Garantía de Santiago el 18 de junio de 2014.

Atendido lo ocurrido, el día 6 de julio de 2016, la actora por sí y en representación de su hija, interpuso una querrela criminal en contra de Carlos Becerra Figueroa, por la responsabilidad que le cabía en el cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath Núñez, la que fue declarada admisible el día 7 de julio del mismo año. Admitida la querrela, como nueva diligencia investigativa, previa solicitud de sus representantes, la fiscal Patricia Varas Pacheco dispuso que se realizara una reconstitución de escena respecto de los hechos ocurridos el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YQHDXLCBVMK

7 de febrero de 2014, la que se programó para el 11 de noviembre de 2016, sin que concurriera la fiscal a dicha diligencia, levantándose un acta de la realización de la misma y un informe dando cuenta de que el resultado obtenido es que no se puede establecer una dinámica general del accidente ni determinar una causa basal del hecho, en virtud de las consideraciones que reproduce.

En este contexto, producto de una investigación deficiente, la fiscal a cargo, Patricia Varas Pacheco, con fecha 25 de enero de 2018 hizo uso de la facultad de no perseverar en el procedimiento por no haber reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación, conforme el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, por lo que la querellante solicitó autorización para deducir acusación particular, lo que fue autorizado en la misma audiencia. En virtud de lo anterior, y lo dispuesto por el artículo 258 inciso cuarto del Código Procesal Penal, con fecha 18 de marzo de 2018 dedujeron acusación particular en contra de Carlos Becerra Figueroa, por la responsabilidad que le cabía en el cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath Núñez, por lo que se prosiguió con la audiencia de preparación de juicio oral, dictándose el auto de apertura el 15 de mayo de 2018 y remitiéndose los antecedentes al 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, conservándose el RUC de la investigación y fijando audiencia de juicio oral para el 27 de agosto de 2018.

El día 27 de agosto de 2018 se inició el juicio oral y, luego de la rendición de pruebas, se dictó unánimemente veredicto condenatorio en contra de Carlos Becerra Figueroa, fijándose la lectura de sentencia para el día 1 de septiembre de 2018, la cual se efectuó dicho día y por unanimidad se condenó a Carlos Becerra Figueroa como autor del cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath Núñez el día 7 de febrero de 2014, aplicándose las penas que detalla. Luego, refiere latamente el contenido de la sentencia condenatoria firme.

En cuanto al derecho, cita los artículos 6 y 83 de la Constitución Política de la República, 38 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y el artículo 42 de la Ley N°18.575.

Al referirse a los perjuicios, explica que, si bien la muerte de Matías Waltemath Núñez no pudo evitarse con la acción del Estado ni resulta exigible al Ministerio Público y sus agentes un desenlace judicial exitoso, si existe un perjuicio anímico y emocional severo a raíz de la incorrección o abandono del deber de los encargados de aclarar el cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath Núñez y las lesiones graves gravísimas de las cuales fue víctima Krystel Abrigo Jara. Estima que el Ministerio Público fue negligente en el ejercicio



de las facultades de no iniciar la investigación y de no perseverar en el procedimiento, al punto que no se formalizó a Carlos Becerra Figueroa por estos hechos, dejando el curso de la acción penal a cargo de la víctima, pese a que los antecedentes reunidos son los mismos que permitieron la condena del imputado.

Respecto de la evaluación del daño moral, sostiene que la cuantía debe determinarse, como señala la jurisprudencia y la doctrina, recurriendo a ciertos criterios que ponen de relieve la satisfacción de la víctima, la magnitud del perjuicio ocasionado, la gravedad del hecho causante del daño, la proporcionalidad y la extensión del daño, por lo que solicita se le indemnice a título de daño moral la suma de \$300.000.000 para Krystel Abrigo Jara y de \$360.000.000 para Marthina Waltemath Abrigo, o la suma que el tribunal determine conforme al mérito del proceso.

Por tanto, con el mérito de lo expuesto y previa invocación de disposiciones legales, solicita que se acoja la demanda en todas sus partes, condenándose a la demandada al pago de las sumas referidas, con costas.

**SEGUNDO:** Que, al contestar la demanda deducida en su contra, solicita el rechazo de la misma por cuanto no concurren los presupuestos para atribuir responsabilidad al Fisco de Chile.

En primer término, controvierte los hechos expuestos por la demandante. Luego, aclara que, en base a nuestro ordenamiento jurídico, el régimen general de responsabilidad de los agentes del Estado es la falta de servicio, el que revisa pormenorizadamente; y, en el caso del Ministerio Público este se rige por un estatuto especial de responsabilidad por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias, según dispone el artículo 5 de la Ley N°19.640, lo que significa que se emplea un título de imputación diverso al de falta de servicio, debiendo concurrir los demás elementos de la responsabilidad extracontractual.

A continuación, explica el concepto de conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público, el cual resulta homólogo al empleado para referirse a la responsabilidad por error judicial.

Alega la falta de presupuestos legales para imputar responsabilidad a los órganos del Estado. En el caso de Carabineros de Chile, la institución participó en dos diligencias del procedimiento penal de los cuales no puede establecerse alguna acción negligente ni que importe falta de servicio de la referida.

En relación al Ministerio Público, actuó válidamente y dentro del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, ya que tenía dos informes policiales



que no imputaban responsabilidad al conductor del microbús, estando facultado para determinar el curso del procedimiento, tanto para su cierre, como para el ejercicio de alguna facultad de término anticipado, conforme el artículo 248 del Código Procesal Penal, cuestión ratificada por el tribunal al momento de estimar que concurrían los requisitos para comunicar la decisión de no perseverar, la que puede ser empleada prescindiendo de la formalización y se respalda en los propios antecedentes de la investigación, obtenidos de forma prolija y que por razones ajenas a la voluntad del fiscal a cargo no ha generado buenas expectativas de éxito desde el punto de vista de la persecución penal.

Argumenta que las demandantes no han sufrido algún daño, pues, sin perjuicio de que el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación de los hechos que causaron la muerte del padre y cónyuge de las actoras, finalmente la justicia dictó un fallo que condenó al conductor del microbús como autor del cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath Núñez.

En subsidio de su alegación sobre ausencia de daños, niega la existencia de una relación de causalidad entre el daño alegado y la omisión imputada al Ministerio Público, toda vez que los perjuicios que se reclaman encontrarían su causa directa e inmediata en la acción del chofer de microbús que colisionó con la motocicleta. En la especie, todas las conductas desplegadas por Carabineros de Chile y el Ministerio Público son legítimas y no causaron daño a los demandantes, quienes finalmente obtuvieron una sentencia condenatoria del autor del cuasidelito de homicidio. De esta forma, cualquiera sea el criterio que se aplique en materia de causalidad, no se puede desconocer que el resultado que se alega como fundamento de la indemnización pretendida no se produjo en las deficiencias de la investigación que acusa ni por la decisión de no perseverar del Ministerio Público, sino en la conducción descuidada del vehículo de transporte público que colisionó la motocicleta.

Por último, para el improbable evento de que sus alegaciones fuesen desvirtuadas, hace presente algunas consideraciones respecto del monto de la indemnización que obligan a fijar un monto moderado, acorde al mérito del proceso y los criterios jurisprudenciales de proporcionalidad y razonabilidad, rebajando considerablemente el monto pedido.

**TERCERO:** Que, al evacuar la réplica, la demandante reitera que la investigación de los hechos fue realizada de forma desprolija por agentes de Carabineros de Chile y del Ministerio Público, toda vez que, de las propias declaraciones de los funcionarios públicos que participaron en la investigación,



prestadas en el juicio oral seguido en contra Carlos Becerra Figueroa, se puede establecer que las diligencias de la investigación no fueron adecuadas y la conducta desplegada por los funcionarios públicos que intervinieron fue negligente, lo que funda en extractos de las declaraciones prestadas en el juicio oral por la fiscal y los carabineros que participaron en la investigación.

**CUARTO:** Que, al evacuar la dúplica, la demandada solicita el rechazo de la demanda, con costas, por cuanto, además de controvertir los hechos, la decisión de la fiscal Patricia Varas Pacheco se justificó en razón de que ella evaluó la prueba producida en la investigación y determinó que no había reunido antecedentes suficientes que a su juicio permitieran fundar una acusación, sin que la demandante pueda alegar la falta de diligencias que no propuso oportunamente, especialmente cuando se dictó un fallo condenatorio en contra del chofer del microbús que colisionó a la motocicleta que conducía la víctima.

**QUINTO:** Que, para acreditar los asertos vertidos en su demanda, la actora rindió prueba testimonial, mediante la deposición de Pedro López Alfaro, Sergio Ahumada Puente, José Igayman López y Carmen Contreras Sáez, quienes, legalmente juramentados y sin tachas, depusieron al tenor de los puntos de prueba; y la siguiente prueba documental: carpeta investigativa de la causa RUC N°1400138259-5, parte detenido N°713, tres informes técnico pericial, set de fotográfico del informe SIAT, informe particular de accidente por Elías Burgos, solicitud de diligencias solicitando la reapertura de la investigación, escrito comunicando decisión de no perseverar, resolución que citó a audiencia de comunicación de dicha decisión, acta de la misma audiencia en que consta la autorización para acusación particular, acusación particular, acta de audiencia preparatoria del juicio oral, auto de apertura de juicio oral, sentencia definitiva condenatoria, actas de transcripción de las declaraciones de la fiscal adjunto Patricia Varas Pacheco, víctima Krystel Abrigo Jara, testigo Pedro López Alfaro y testigo Sergio Ahumada Puente, certificados de nacimiento de Marthina Waltemath y Krystel Abrigo, certificado de defunción de Matías Waltemath, ficha clínica de Krystel Abrigo, informe del Servicio Médico Legal con autopsia de la víctima, registro de audio de declaración de testigos y peritos, además de alguna jurisprudencia sobre el particular.

Por su parte, la demandada no rindió prueba de ninguna especie.

**SEXTO:** Que, de lo afirmado por las partes y la prueba rendida en este procedimiento, se puede tener por establecido que –de no ser por la intervención de la víctima- la investigación por el cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YQHDXLCBVMK

Núñez, seguida bajo el RUC N°1400138259-5, hubiese concluido mediante el ejercicio de la facultad de no iniciar la investigación o mediante la decisión de no perseverar en el procedimiento.

Asimismo se puede establecer que, en virtud de la acusación particular formulada por las demandantes, el procedimiento concluyó mediante sentencia condenatoria de uno de septiembre de 2018 dictada por el 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en que se condenó a Carlos Becerra Figueroa como autor del cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath Núñez, cometido el día 7 de febrero de 2014.

**SÉPTIMO:** Que, respecto de lo anterior, corresponde determinar si los agentes del Estado que intervinieron en la investigación penal referida desplegaron una conducta que pueda ser calificada como falta de servicio, o injustificadamente errónea o arbitraria; o, si por el contrario, la conducta desplegada por los agentes del Estado que intervinieron en la investigación penal se ajustó a los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios que deben observar.

Al respecto, la demandada señaló la conducta desplegada por los agentes policiales de Carabineros de Chile y por el ente persecutor fue diligente, prolija, con observancia de las disposiciones legales que la regulan, sin que el resultado de la investigación, o del procedimiento penal, se encuentre comprendido dentro de los deberes de los funcionarios que intervinieron en el mismo. En este sentido, esgrimió que la diligencia empleada por los funcionarios públicos que participaron satisface el estándar legal desde el momento en que el procedimiento concluyó mediante el empleo de la facultad de no iniciar la investigación y, luego, mediante la comunicación de no perseverar en el procedimiento, ambas facultades exclusivas del Ministerio Público, de conformidad al Código Procesal Penal.

**OCTAVO:** Que, para dilucidar si la conducta desplegada por los agentes estatales que intervinieron en la persecución penal puede ser calificada como falta de servicio, o injustificadamente errónea o arbitraria, corresponde analizar las deficiencias imputadas por la demandante, corroborar si las mismas se encuentran acreditadas y si estas infringen el estándar legalmente establecido.

En relación a esto, tal como da cuenta la sentencia penal que condenó a Carlos Becerra Figueroa como autor del cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath Núñez y los demás antecedentes de la carpeta investigativa, incluidos los partes policiales, los informes periciales y la deposición en calidad de testigos en el juicio oral de los funcionarios públicos que intervinieron en la investigación,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YQHDXLCBVMK

existió una serie de desprolijidades desde la realización de las primeras diligencias de la investigación que indujeron a los distintos agentes que intervinieron en el procedimiento a cometer errores significativos en la recopilación de antecedentes y en el establecimiento de los hechos sobre los que debía recaer la investigación, los que concluyeron con la decisión injustificadamente errónea de ejercer la facultad de no dar inicio a la investigación y de no perseverar en el procedimiento, tal como quedó demostrado por la obtención de una sentencia condenatoria a instancia de la acusación particular formulada por la víctima empleando prácticamente los mismos antecedentes recopilados durante la investigación por el ente persecutor.

En efecto, durante el curso de la investigación distintos agentes del Estado, pertenecientes a Carabineros de Chile y al Ministerio Público, desplegaron conductas indebidas que configuran infracciones a los deberes que legalmente recaen sobre los mismos, como se detallará a continuación.

**NOVENO:** Que, dentro de las desprolijidades que se identifican en la investigación, resulta llamativa la primera intervención policial en el procedimiento, en la que participó Ricardo Contreras Hernández, Sargento de la 45° Comisaria de Carabineros de Cerro Navia, quien se encontraba el día 7 de febrero de 2014 aproximadamente a cien metros del lugar del accidente en que falleció Matías Waltemath Núñez, donde concurrió y conversó con el chofer del bus que participó en la colisión, quien indicó su versión, sin que dicha declaración fuese consignada por el funcionario, que por lo demás no recuerda haber identificado testigos de los hechos. Lo anterior infringe lo dispuesto por el artículo 83 del Código Procesal Penal, el cual dispone que les corresponde a los funcionarios de Carabineros de Chile realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales: c) resguardar el sitio del suceso; y, d) identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso.

En el mismo sentido, fue negligente la intervención de Marcelo Valenzuela Rodríguez, capitán de Carabineros de Chile, quien reconoce que el día 7 de febrero de 2014, mientras cumplía funciones en la SIAT, recibe un requerimiento del Ministerio Público por un accidente de tránsito, al que llegaron aproximadamente una hora y media después de su ocurrencia, sin que encontraran testigos de los hechos, por lo que, atendido el tiempo de entrega de la diligencia al Ministerio Público, se tomó declaración únicamente chofer del autobús involucrado en el accidente, concluyendo erróneamente que la causa basal del





accidente fue la conducta indebida del vehículo menor involucrado en este, mientras que uno de sus ocupantes falleció y la otra se encontraba gravemente herida. En este sentido, resulta completamente impropio de la labor pericial establecer precipitadamente los hechos en base a la declaración meramente exculpatoria de uno de los involucrados, quien por lo demás sería condenado por la comisión del ilícito.

Por último, la conducta desplegada por Patricia Varas Pacheco, fiscal adjunto que dirigió la investigación penal, a juicio de este sentenciador, aparece como injustificadamente errónea o arbitraria, toda vez que reconoció, en la calidad de testigo que luego comparecería, que el tratamiento del procedimiento fue estandarizado, de aquellos que forman parte de la denominada fiscalía de causas de tramitación masiva, sin que reparara que el informe SIAT únicamente determinó la causa basal del accidente según la dinámica general observada y en virtud de la declaración exculpatoria de uno de los involucrados en el accidente, hechos que resultan insuficientes para determinar la inexistencia de un delito o la falta de antecedentes para fundar una acusación, como luego quedaría demostrado por la acusación particular formulada por las demandantes, que concluyó en una sentencia penal condenatoria.

**DÉCIMO:** Que, como se razonó, la investigación por el cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath Núñez, seguida bajo el RUC N°1400138259-5, se vio afectada por una serie de desprolijidades de los intervinientes de la investigación, que configuran conductas negligentes o injustificadamente erróneas, tanto por la contravención explícita a deberes que recaían sobre los agentes del Estado que participaron en el procedimiento y, por cuanto, los antecedentes disponibles eran suficientes para perseguir la responsabilidad penal del imputado y fundar una acusación en su contra, como quedó demostrado por la sentencia condenatoria de Carlos Becerra Figueroa.

Ahora bien, habiéndose establecido la comisión de conductas negligentes que pueden dar origen a la responsabilidad del Estado por el desempeño de sus organismos y funcionarios, corresponde verificar si en la especie –dichas conductas negligentes- ocasionaron un daño causalmente imputable a las mismas que engendre la obligación de resarcir los perjuicios directamente provocados.

**UNDÉCIMO:** Que, como adecuadamente apuntan ambas partes, la responsabilidad del Estado sólo puede extenderse a los daños provocados por su conducta, circunstancia que excluye cualquier deber de reparar los perjuicios ocasionados como consecuencia del deceso de Matías Waltemath Núñez,



atendido que los mismos sólo son imputables a la conducta del condenado Carlos Becerra Figueroa, único responsable del cuasidelito de homicidio del padre y cónyuge de las demandantes.

Independiente de lo anterior, la demandada señala que no existe perjuicio alguno sufrido por las demandantes, toda vez que el responsable del cuasidelito de homicidio de Matías Waltemath Núñez fue condenado, de forma que no puede reclamarse un perjuicio producto de la ineficacia del sistema penal o de la impunidad del autor del ilícito.

Al respecto, y si bien es efectivo que el sistema penal logró procesar adecuadamente el conflicto subyacente al permitir la condena del autor, los daños ocasionados emanan de la carga impuesta por los funcionarios públicos y organismos estatales a la víctima de perseguir particularmente la responsabilidad penal, desatendiendo los deberes que recaen en los intervinientes, los derechos que asisten a las víctimas y los principios que inspiran el proceso penal, circunstancia que implica un detrimento para las víctimas que deben soportar por su cuenta la sustanciación del procedimiento hasta la obtención de una sentencia condenatoria. En este sentido, la conducta desplegada por los organismos de persecución penal generó un perjuicio en la víctima al imponerle la carga ilegítima de participar de forma proactiva en el procedimiento penal para obtener la condena del imputado.

**DUODÉCIMO:** Que, según se explicitó, deben ser excluidos los daños emanados de la conducta ilícita del conductor condenado, los que comprenden la muerte del padre y cónyuge de las demandantes, como también aquellos perjuicios morales que pudiesen haberse manifestado ante la impunidad del autor del delito, atendido que los primeros son atribuibles exclusivamente al autor del cuasidelito de homicidio y los segundos no se materializaron, toda vez que en definitiva resultó condenado Carlos Becerra Figueroa.

No obstante lo anterior, como se enunció, esto no excluye todos los perjuicios surgidos directa e inmediatamente de las conductas ilícitas desplegadas por agentes del Estado, los que, en este caso, se limitan a la imposición de una carga excesiva para la víctima en torno a promover la persecución penal por su cuenta, con sus medios y sin la asistencia técnica especializada del Estado de la que debía disponer, bajo la amenaza de que el autor del ilícito resultara impune.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, como se expuso sobre los perjuicios causalmente imputables a la conducta desplegada por los agentes del Estado, no resulta atendible la suma reclamada como indemnización de perjuicios, pues, no



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YQHDXLGBVMK

puede atribuirse a sus funcionarios u organismos la muerte de Matías Waltemath Núñez ni el pesar psicológico y emocional que debió enfrentar producto de la misma, como tampoco las lesiones graves experimentadas por Krystel Abrigo Jara, e incluso debe excluirse como daño el fracaso de la acción penal, atendida la condena lograda por la víctima.

De esta manera, los perjuicios resarcibles sólo están relacionados con aquellos daños emanados de soportar la carga de sustanciar un procedimiento penal que debió ser dirigido eficientemente por los organismos de persecución punitiva, por lo que no pueden alcanzar la suma pedida y resulta forzoso rebajar sustantivamente los montos reclamados, por estimarse excesivos, los que prudencialmente se fijarán en la suma de \$15.000.000 por concepto de daño moral para Krystel Abrigo Jara y \$18.000.000 por el mismo concepto para Marthina Waltemath Abrigo.

Por estas consideraciones, visto además lo dispuesto por los artículos 144, 160, 170, 254, 341 y siguientes; 2314 y siguientes, 2492 y siguientes del Código Civil; 6 y 7 de la Constitución Política de la República; Código Procesal Penal; y, Ley N°19.640; se resuelve que:

- I. Se acoge la demanda deducida con fecha 24 de marzo de 2020, solo en cuanto se condena a Fisco de Chile a pagar la suma de \$15.000.000 por concepto de daño moral para Krystel Abrigo Jara y el monto de \$18.000.000 por el mismo concepto para Marthina Waltemath Abrigo.
- II. Cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol: C-5.603-2020.

Dictada por Julio Ernesto Ramírez Zolezzi. Juez Subrogante del Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintitrés de Enero de dos mil veinticuatro.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YQHDXLCBVMK

